

PERIODO 119º



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

66ª REUNION – 20ª SESION ORDINARIA

23 DE OCTUBRE DE 2001

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
don MARIO A. LOSADA

Secretarios:

Señor JUAN C. OYARZUN, señor JOSE D. CANATA y señor MIGUEL J. MAMY

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, doctor MIGUELA. FERNANDEZ ALIAS y señor RODOLFO BERNARDINI

ESTA PUBLICACION CONTIENE, ADEMAS, LAS REUNIONES 67ª Y 68ª

LA REUNION 65ª PERTENECE A SESION EN TRIBUNAL

PRIMERA PARTE



SENADORES PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 ALASINO, Augusto
 ALTUNA, Juan C.
 ANGELOZ, Eduardo C.
 ARNOLD, Eduardo A.
 BAUM, Daniel
 BAUZÁ, Eduardo
 CABANA, Fernando V.
 CAFIERO, Antonio F.
 CÁNTARERO, Emilio Marcelo
 CARBONELL, José F.
 CONTATO CAROL, Eduardo Ramón
 CORACHI, Carlos Vladimiro
 COSTANZO, Remo J.
 DE LA ROSA, Carlos L.
 DEL PIERO, Pedro
 GAGLIARDI, Edgardo
 GALVÁN, Raúl A.
 GARCÍA ARECHIA, José M.
 GIOJA, José L.
 LEÓN, Luis A.
 LÓPEZ, Alcides H.
 LOSADA, Mario A.
 LOZA, Juan Carlos
 MAGLIETTI, Alberto R.
 MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique J. M.
 MARTÍNEZ PEIÁEZ, Nélida Susana
 MASSACCESI, Horacio
 MASSAT, Jorge
 MAYA, Héctor M.
 MENEGHINI, Javier Reynaldo
 MENEM, Eduardo
 MOLINARI ROMERO, Luis Arturo R.
 MOREAU, Leopoldo R. G.
 NEGRE de ALONSO, Liliana Teresita
 ORTEGA, Ramón Bautista
 OUDIN, Ernesto

PALACIOS, Gerardo L.
 PARDO, Angel F.
 PRUYAS, Tomás R.
 RAIJER, Beatriz I.
 ROBLES, Miguel Ángel Ernesto
 RODRÍGUEZ, Manuel A.
 ROMERO, Marcelo J.
 ROMERO FERIS, José A.
 ROSTAN, Néstor D.
 SÁEZ, José María
 SAGER, Hugo Abel
 SALA, Osvaldo R.
 SALUM, Humberto E.
 SAN MILLÁN, Julio Argentino
 SAPAG, Felipe R.
 SAPAG, Silvia E.
 TELL, Alberto Máximo
 ULLOA, Roberto Augusto
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VARIZAT, Daniel A.
 VERNA, Carlos Alberto
 VILLARROEL, Pedro G.
 VILLAYERDE, Jorge A.
 YOMA, Jorge Raúl
 ZALAZAR, Horacio Aníbal

AUSENTES CON AVISO:

GENOUD, José
 HUMADA, Julio C.
 MIKKELSEN-LÓTH, Jorge F.
 PRETO, Ruggero
 TORINO, Héctor Omar

CON LICENCIA:

BRANDA, Ricardo A.

CON LICENCIA POR ENFERMEDAD:

BRAVO, Leopoldo

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 4798.)
2. Asuntos entrados:
 - I. Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado. (Pág. 4798.)
 - II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación de la doctora Eva Liliana Parcio como jueza a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia (P.E.-637/2001). (Pág. 4798.)

- III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Javier María Leal de Ibarra como juez de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (P.E.-638/2001). (Pág. 4799.)
- IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Hugo Nicolás Luis Bruzone como director del Banco Central (P.E.-642/2001). (Pág. 4799.)
- V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del doctor Roberto

proyecto de comunicación del señor senador Martínez Almudevar por el que se declaran de interés de este honorable cuerpo las Jornadas de Radiología (S.-1.347/2001). Se aprueba. (Pág. 5090.)

102. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de comunicación del señor senador Villaverde por el que se solicitan informes sobre la eventual incorporación de voluntarios para la defensa (S.-1.295/2001). Se aprueba. (Pág. 5090.)

103. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Cultura en el proyecto de declaración del señor senador Altuna por el que se declara de interés educativo y cultural la realización de la XVII FERIA Provincial del Libro, a desarrollarse en Gaimán, Chubut (S.-57/2001). Se aprueba. (Pág. 5091.)

104. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Cultura en el proyecto de declaración del señor senador Altuna y de la señora senadora Martínez Peláez por el que se declaran de interés educativo y cultural el I Congreso Internacional y VIII Encuentro de Profesores de Literatura Infantil y Juvenil de la Patagonia, realizado en Cipolletti, Río Negro (S.-636/2001). Se aprueba. (Pág. 5092.)

105. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicita la instrumentación de un programa especial de empleo (S.-720/2001). Se aprueba. (Pág. 5094.)

106. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador Torino por el que se declara de interés parlamentario la creación del Cabildo de la Tercera Edad para la Convocatoria de Representaciones de Diverso Origen (S.-847/2001). Se aprueba. (Pág. 5094.)

107. Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación de la señora senadora Raijer por el que se solicita se declare de interés nacional la Red Nacional de Mujeres de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) (S.-1.360/2001). Se aprueba. (Pág. 5095.)

108. Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Turismo en el proyecto de comunicación del señor senador Maya y otros señores senadores por el que

se solicita la ejecución de las obras pendientes para la protección de playas de agua debajo de Salto Grande (S.-2.423/2000). Se aprueba. (Pág. 5096.)

109. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación en el proyecto de comunicación del señor senador Salum por el que se solicita la remisión de las partidas presupuestarias adeudadas a la Universidad Nacional de Jujuy (S.-1.049/2001). Se aprueba. (Pág. 5097.)

110. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Familia y Minoridad en el proyecto de comunicación del señor senador Mikkelsen-Löth por el que se solicitan informes sobre políticas para la resocialización de menores con problemas de conducta (S.-576/2001). Se aprueba. (Pág. 5098.)

111. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de resolución del señor senador Tell y otros señores senadores por el que se requiere la realización de controles de gestión sobre las sentencias judiciales en el ámbito de la ANSES (S.-1.254/2001). Se aprueba. (Pág. 5099.)

112. Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores Verna y Tell por el que se incorpora un párrafo a la ley 25.401 (presupuesto 2001) a fin de prorrogar pensiones graciables (S.-1.452/2001). Se aprueba. (Pág. 5101.)

113. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la consulta formulada por la vicepresidencia de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración con respecto a la designación de los señores auditores generales de la Auditoría General de la Nación y la legalidad de la prórroga de sus mandatos (S.-1.486/2001). Se aprueba. (Pág. 5102.)

114. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el programa de propiedad participada de los ex agentes de YPF (C.D.-91/2001) Se aprueba. (Pág. 5111.)

115. Consideración del dictamen de las comisiones de Deportes, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Sager sobre Programa Nacional de Apoyo al Deporte (S.-884/2001). Se aprueba. (Pág. 5115.)

municipalidad de Basavilbaso, Entre Ríos (S.-1.301/2001). Se aprueba. (Pág. 5228.)

146. **Moción de preferencia** formulada por el señor senador Gioja para tratar como primer tema de la próxima sesión con despacho de comisión el proyecto de ley del señor senador Tell y otros señores senadores por el que se establece la intangibilidad de los importes acordados en concepto de coparticipación de impuestos y fondos específicos para las provincias (S.-1.244/2001). Se aprueba. (Pág. 5229.)
147. **Consideración del proyecto de ley** del señor senador Villaverde por el que se incorpora a continuación del texto actual del artículo 2º de la ley 25.414 un párrafo por el que se limita la delegación de facultades en materia de defensa y seguridad interior (S.-1.188/01). Se aprueba. (Pág. 5229.)
148. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración** de los señores senadores López y Usandizaga por el que se expresa beneplácito por la obtención del Primer Premio Medalla de Oro en el 10º Men's World Cup Qualifier, realizado en Escocia por el Seleccionado Argentino de Hockey (S.-1.088/2001). Por falta de quórum se pasa a cuarto intermedio hasta mañana. (Pág. 5231.)
149. **Apéndice:**

I. Sanciones del Honorable Senado. (Página 5231.)

II. Inserciones. (Pág. 5242.)

—En Buenos Aires, a las 19 y 45 del martes 23 de octubre de 2001:

Sr. Presidente (Losada). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Losada). — Invito al señor senador por Catamarca doctor Pedro G. Villarroel a izar la bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Villarroel procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Losada). — Por Secretaría se hizo llegar oportunamente la lista de los asun-

tos entrados. Corresponde que los señores senadores formulen al respecto las consideraciones que estimen pertinentes.

Sr. Secretario (Oyarzún). — *(Lee:)* Foja número 1. Foja número 2: Poder Ejecutivo, mensaje número 1201/2001, por el que se solicita acuerdo para designar juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Chubut, a la doctora Eva Liliana Parcio. Número 1202/2001: juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Chubut, al doctor Javier María Leal de Ibarra. Número 1203/2001: director del Banco Central de la República Argentina al doctor Hugo Nicolás Luis Bruzone. Número 1297/2001: director del Banco Central de la República Argentina al doctor Roberto Antonio Reyna. Número 1298/2001: director del Banco Central de la República Argentina al doctor Ricardo Alberto Branda. Foja número 3. Foja número 4. Secretaría informa que los folios faltantes del 5 al 18 corresponden a respuestas del Poder Ejecutivo Nacional.

Fojas, números 19, 20, 21, 22.

—Los asuntos de los que se ha dado cuenta son los siguientes:

I

Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado

Decreto del 25 de septiembre de 2001 por el que se designa al señor senador Robles para integrar la Comisión de Familia y Minoridad (D.P.P.-031/01). *(A sus antecedentes.)*

—Decreto del 17 de octubre de 2001 por el que se aceptan las donaciones efectuadas por diversos ciudadanos de distintas obras de su autoría (D.P.P.-032/01). *(A sus antecedentes.)*

II

Designación de la doctora Eva Liliana Parcio como jueza a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Solicitud. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2001.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99 inciso 40 de la Constitución Nacional, del juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia.

respecto de que los mandatos deben computarse a partir del 5 de setiembre de 1995, en su parte final indicamos que en caso de no prevalecer en el pleno del cuerpo el criterio sostenido por esta bancada debe entenderse que el mencionado auditor general doctor Alfredo Fólica, cuenta con la ratificación por parte del bloque radical. Por lo tanto, solicitamos que quede constancia de nuestra manifestación.

Sr. Presidente (Losada). — La Presidencia va a someter a consideración la propuesta formulada por el Bloque Justicialista.

Tiene la palabra el señor senador Yoma.

Sr. Yoma. — Señor presidente: tratándose de la renovación de los tres auditores y teniendo en cuenta que ambos bloques han formulado sus propuestas, solicito que se voten.

Sr. Presidente (Losada). — Debo indicarle, señor senador, que en primer término el bloque de la Unión Cívica Radical debe efectuar esa moción. ¿Este es el criterio del bloque radical?

Sr. Agúndez. — Sí.

Sr. Presidente. — Entonces, la Presidencia someterá a votación los nombres de los tres candidatos propuestos para la renovación de los miembros de la Auditoría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las propuestas formuladas por los bloques Justicialista y de la Unión Cívica Radical.

114

PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE LOS EXAGENTES DE YPF

Sr. Presidente (Losada). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF. (Orden del Día N° 959.)

—El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyec-

to de ley en revisión C.D.-91/2001, sobre el Programa de Propiedad Participada de los ex agentes de YPF; y por sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 16 de octubre de 2001.

Julio A. San Millán. — Carlos A. Verna. — Leopoldo R. G. Moreau. — Jorge J. Massat. — Ricardo A. Branda. — Jorge A. Villaverde. — Julio C. Humada. — Horacio A. Zalazar. — Augusto Alasino. — Antonio F. Caffero. — Emilio M. Cantarero. — José L. Gioja. — Remo J. Costanzo. — José F. Carbonell. — Felipe Sapag. — Daniel Baum. — Osvaldo R. Sala. — Gerardo L. Palacios.

En disidencia:

Alberto M. Tell.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (12 de setiembre de 2001)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA DE LOS EX AGENTES DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES

Artículo 1° — Aclárase el alcance del apartado c), artículo 8° de la ley 24.145, de la siguiente forma:

Artículo 89: c): Clase C. Las que adquiriera el personal de la empresa, hasta el diez por ciento (10 %) del capital social, bajo el régimen de propiedad participada de la ley 23.696. Será considerado personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, aquel que se peñaba en relación de dependencia con YPF S.A., al 1° de enero de 1991, y que hubiese comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.

Art. 2° — Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex agentes de YPF Sociedad del Estado —encuadrados en el artículo 1° de la presente ley—, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. La indemnización resultará de valorar las siguientes pautas:

a) La cantidad de acciones que ex agente hubiera debido percibir según las pautas del artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de

los datos de ingreso y egreso —si correspondiere—, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa;

- b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones —el que hubieran debido saldar los ex agentes—, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta.

Art. 3º — Suspéndase desde la sanción de la presente ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles, todas las causas judiciales por reclamos sustentados por los ex agentes de YPF, tendientes a obtener reconocimiento de sus derechos a las acciones clase C de YPF S.A., o en su defecto el pago en efectivo del valor de tales acciones.

Art. 4º — En el plazo de sesenta (60) días hábiles, el Ministerio de Economía de la Nación, deberá notificar a los ex agentes de YPF S.A. que se hubiesen encontrado trabajando en la empresa el 1º de enero de 1991, las liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta las pautas indicadas en el artículo 2º de la presente ley. En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.

Art. 5º — Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión de bonos para la consolidación de la deuda reconocida por la presente ley a favor de los ex agentes de YPF S.A., con los alcances y en la forma prevista por la ley 23.982 y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.

Art. 6º — La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

RAFAEL M. PASCUAL.
Guillermo R. Aramburu.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Fayad y otros.

Sr. Presidente (Losada). — En consideración en general.

Sr. Tell. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Señor presidente: solicito que quede constancia de mi disidencia total al proyecto.

Sr. Presidente (Losada). — Así se hará, señor senador.

Sr. San Millán. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. — Señor presidente: a través del proyecto de ley en revisión que estamos considerando se pretende conseguir el beneficio de acceso al Programa de Propiedad Participada para los ex agentes que prestaron servicios en YPF y que, por razones ajenas a su voluntad, fundamentalmente de orden temporal, quedaron excluidos de dicho régimen.

Como bien establece el proyecto, hoy no sería posible la entrega material de las acciones que hubieren correspondido a los ex agentes excluidos, razón por la cual se sustituye esa entrega por el pago de un monto indemnizatorio por parte del Estado nacional, el que puede ser abonado mediante bonos de consolidación, ley 23.982.

El artículo 1º del proyecto de ley en revisión modifica el inciso c) del artículo 8º de la ley 24.145 de federalización de hidrocarburos y privatización de YPF. Recordemos que dicho artículo establece las características de las acciones que componen el capital social de YPF Sociedad Anónima, y su inciso c) se refiere al Programa de Propiedad Participada. En síntesis, la sanción de Diputados agrega al mentado artículo 8º, inciso c), un párrafo mediante el cual incorpora como beneficiario del programa a todo el personal que se desempeñaba en la empresa el 1º de enero de 1991 y que había comenzado su relación laboral con anterioridad a esa fecha.

El artículo 2º de la sanción de la Cámara de Diputados establece que el Estado nacional deberá indemnizar a los ex agentes incorporados en el inciso c) antes mencionados, y señala la fórmula del cálculo de la indemnización que corresponderá abonar a cada uno, la que guarda relación con los ítem y parámetros que se aplicaron a los trabajadores que pudieron acogerse al Régimen de Propiedad Participada hace varios años.

El artículo 3º dispone la suspensión de todos los juicios iniciados por los ex agentes de YPF con fundamento en su exclusión de los programas de propiedad participada por un término de ciento veinte días hábiles. Cabe aclarar que tanto en primera instancia como en la alzada, es decir, en la Cámara de Apelaciones, ya hubo innumerables casos en que se obtuvieron sentencias favorables reconociendo los derechos que por esta ley generalizamos a todos los que están en idéntica situación, evitando así juicios innecesarios. Con la sanción de esta norma será

el Congreso el que repare este acto de injusticia y de desigualdad entre argentinos ex trabajadores de YPF.

El artículo 4º encomienda al Ministerio de Economía la notificación a todos los agentes comprendidos por este proyecto de la liquidación que a cada uno corresponde percibir fijándole para ello un plazo de sesenta días hábiles.

El artículo 5º autoriza al Poder Ejecutivo a realizar la emisión de bonos de consolidación ley 23.982 para atender los gastos que origine la cancelación de las indemnizaciones dispuestas y/o a resignar partidas presupuestarias para el mismo fin.

El artículo 6º establece la vigencia de la ley y el 7º es el artículo de forma.

Por último, señalo que este proyecto de ley en revisión es de autoría de los diputados Víctor Fayad, Juan Pablo Baylac y Marcelo López Arias.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Baum.

Sr. Baum. – Señor presidente: es importante que votemos este proyecto que constituye una esperanza para los ex trabajadores de YPF de toda la República Argentina que han pasado largos momentos de angustia y de dolor.

Desde hace varios miércoles acuden a las puertas del Congreso de la Nación muchos ex trabajadores de YPF con la esperanza de que votemos este proyecto.

Por las razones expuestas, adhiero fervientemente y voy a votar en forma afirmativa este proyecto.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Arnold.

Sr. Arnold. – Señor presidente: como habitante de una zona petrolera del norte de Santa Cruz también he trabajado desde hace tiempo para llevar adelante este viejo reclamo de los ex empleados de YPF que dejaron una vida de esfuerzo y sacrificio en esta empresa nacional señera y que se vieron perjudicados por este largo peregrinaje para tratar de cobrar lo que legítimamente les corresponde.

No quiero extenderme. Por ello, en honor a la brevedad, voy a solicitar la inserción de lo que tenía pensado decir.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Varizat.

Sr. Varizat. – Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto afirmativo respecto de este proyecto de ley que pretende resarcir, aunque sea en una mínima parte, los grandes perjuicios ocasionados por la privatización de YPF.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador León.

Sr. León. – Señor presidente: ante todo, señalo que adhiero al proyecto en consideración.

Al respecto debo decir que tanto en el Chaco como en otras provincias durante largo tiempo nuestro partido adhirió fervorosamente a la búsqueda de esta solución. Por consiguiente, voto con especial entusiasmo esta reparación que beneficiará a los trabajadores que con su presencia prestigiaron a YPF, la cual lamentablemente ha bajado la bandera azul y blanca.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Ulloa.

Sr. Ulloa. – Señor presidente: represento a una provincia hidrocarburífera en la que la privatización de YPF dejó un tendal de problemas sociales graves que hoy estamos sufriendo. Entiendo que este proyecto de ley cuyo monto realmente no conozco –no sé si el miembro informante nos puede informar algo al respecto–, puede reparar parte de los problemas.

Dejo constancia de que, además, no cubre todos las situaciones porque hay casos similares con Gas del Estado.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador de la Rosa.

Sr. De la Rosa. – Señor presidente: en mérito a la brevedad, dejo expresa constancia del apoyo a la presente iniciativa dado que en la provincia de Mendoza son muchos los ex agentes de YPF que están esperando la sanción de este proyecto.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador Maglietti.

Sr. Maglietti. – Señor presidente: quiero expresar nuestro apoyo a la sanción de la Cámara de Diputados ya que considero que con esta iniciativa se hace justicia respecto de 30 mil ex agentes de YPF que, en su momento, hicieron historia en el país trabajando en esta empresa estatal que fue orgullo de todos los argentinos.

Desgraciadamente, esta empresa hoy ha desaparecido por obra y gracia del gobierno anterior y le pertenece al Estado español. Pero más allá de semejante desgracia, de la cual está pa-

gando las consecuencias toda la Nación, volvemos a tener un oligopolio en materia petrolera. Efectivamente, los combustibles son nuevamente regulados por estas grandes empresas, con lo cual nos retrotrajeron al año 1922 cuando el presidente de la República creó YPF a efectos de contrarrestar la maniobra de estas grandes empresas petroleras y de reducir el precio de los combustibles.

Hoy estamos considerando este proyecto que establece una reparación para quienes han trabajado y contribuido al engrandecimiento de YPF, empresa que contribuyó al desarrollo de toda la Patagonia y de muchas zonas importantes del país, entre ellas el norte y el oeste de la provincia de Formosa, donde perforó una cantidad importante de pozos semisurgentes, con un rendimiento que llegó hasta los 300 metros cúbicos por día.

Luego de su privatización, esos 1.500 empleados quedaron reducidos a nada más que 25, con lo cual todo el desarrollo petrolero del oeste de la provincia de Formosa murió definitivamente.

En consecuencia, este proyecto de ley no es más que un complemento indemnizatorio para hacer justicia con aquellos ex trabajadores de YPF que han sido olvidados y excluidos de un derecho que les correspondía. Por lo tanto, como creemos que se está haciendo justicia, vamos a votar en forma afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Tell.

Sr. Tell. — Señor presidente: ante todo quiero decir que adhiero fervorosamente al espíritu de este proyecto de ley en revisión. Pero en honor a la responsabilidad que me cabe y a las raíces sindicales que uno tiene debo decir que he firmado en disidencia el dictamen, dado que de manera preliminar considero que bajo la forma de un proyecto de ley aclaratoria se dirime un conflicto coyuntural en un sector determinado, desde el momento en que existen tantas causas judiciales en trámite. Por lo tanto, al interferir en una situación litigiosa se desnaturaliza la misión legislativa que tiene este Honorable Congreso. De todos modos, para no explayarme, voy a pedir la inserción de mis fundamentos.

Este proyecto se plantea en función de la suspensión de las causas judiciales, pero lamentablemente no hay un solo artículo que efectivamente contemple la figura del desistimiento de la acción.

Con respecto al espíritu de la iniciativa al que hacía referencia al comienzo de mi exposición, me parece muy bien que la reparación esté destinada a tantos trabajadores que se encuentran en las circunstancias que bien expresaron los distintos senadores. Pero hubiese sido grato que ambas Cámaras de este Congreso abogaran por una ley general de propiedad participada para todos los sectores, porque existen alrededor de 350 mil trabajadores que se hallan en igual situación, ya que en cada una de las provincias tenemos empleados de la ex YPF, así como también ex trabajadores de Ferrocarriles Argentinos o Gas del Estado que están quedando al margen de este proyecto de propiedad participada. Por eso hago hincapié en que se dé tratamiento a iniciativas similares.

A su vez, creo que en el proyecto debería contemplarse el desistimiento de la acción, ya que de lo contrario, al igual que en tantos otros conflictos que tuvimos, este será un negocio para los estudios jurídicos.

Por último, tal como lo manifesté anteriormente, solicito la inserción de mis fundamentos.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Alfuna.

Sr. Alfuna. — Señor presidente: comparto el espíritu de este proyecto de ley, y como pertenezco a una provincia que es cuna del petróleo nacional, desde ya adelanto el voto positivo para esta iniciativa. Creo que a través de ella se restablecerá la equidad y la justicia para los trabajadores de YPF que, en muchos casos, fueron exonerados y, en otros, despedidos sin justa causa.

Sr. Presidente (Losada). — Tiene la palabra el señor senador Sapag.

Sr. Sapag. — Señor presidente: el Movimiento Popular Neuquino no podía quedar al margen de este tema, ya que los dos senadores integrantes de esta bancada —la senadora Silvia Sapag y quien habla— hemos nacidos en Cutral-Có y sabemos lo que es YPF, el esfuerzo de la gente y los derechos que han perdido con esta privatización.

Con una convicción...

—Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente (Losada). — Ruego a los señores senadores escuchar al orador que está haciendo uso de la palabra.

Sr. Sapag. — No importa, señor presidente; estoy hablando para la gente de YPF.

Con una convicción sin límites vamos a apoyar esta iniciativa y esperamos que los derechos y los beneficios recaigan realmente sobre los trabajadores y no sobre los gestores.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. *(Aplausos en las galerías.)*

Corresponde votar las inserciones.

Sr. San Millán. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Losada). – Tiene la palabra el señor senador San Millán.

Sr. San Millán. – Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de parte de la exposición que pensaba realizar y que resumi en honor a la brevedad.

Sr. Presidente (Losada). – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas por los señores senadores.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Losada). – Se procederá en consecuencia.¹

115

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DEPORTE

Sr. Presidente (Losada). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Deportes, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Sager sobre Programa Nacional de Apoyo al Deporte. (Orden del Día N° 951.)

–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Deportes, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General han considerado el proyecto de ley del señor senador Sager (S.-884-2001), sobre Programa Nacional de Apoyo al Deporte; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL DEPORTE

TÍTULO I

Instrumento y alcances

Institución

Artículo 1° – Queda instituido el Programa Nacional de Apoyo al Deporte (Pronade), con la finalidad de captar y canalizar recursos para el ámbito deportivo amateur, incentivando la colaboración privada al modo de fomento para la enseñanza y el desarrollo del deporte en todo el territorio nacional.

Naturaleza

Art. 2° – El Programa Nacional de Apoyo al Deporte consiste en la realización de actividades deportivas, que los beneficiarios podrán llevar a cabo con la colaboración de capitales privados, de los cuales un porcentaje podrá ser deducido del impuesto a las ganancias.

Objeto

Art. 3° – Los objetivos del programa instituido en el artículo 1° son:

- a) Facilitar el libre acceso de las personas al deporte y garantizar su pleno derecho al ejercicio deportivo;
- b) Apoyar, valorizar y difundir el conjunto de las manifestaciones deportivas y sus respectivas entidades sociales;
- c) Incorporar al deporte como actividad auxiliar de la salud a través de la conducción de programas sanitarios y/o planes de rehabilitación física;
- d) Estimular la ejercitación y práctica del deporte entre las personas trasplantadas y aquellas con capacidades diferentes;
- e) Auxiliar el funcionamiento de las instituciones deportivas y de los grupos formadores de la sociedad deportiva argentina;
- f) Incentivar la formación deportiva mediante becas de estudio, investigación, perfeccionamiento y/o especialización en la Argentina o en el exterior;
- g) Patrocinar deportistas amateurs con aptitudes deportivas relevantes, para representaciones nacionales individuales o grupales;
- h) Fomentar el desarrollo de encuentros deportivo-sociales;
- i) Preservar los bienes materiales e inmateriales del patrimonio histórico deportivo argentino;
- j) Promover y estimular el conocimiento y la enseñanza de las disciplinas deportivas, con valorización de los recursos humanos;

¹ Ver el Apéndice.

los esfuerzos de otros países y grupos sociales a favor de la consideración de la implantación de una Tasa Tobin armonizada, y de ámbito mundial, que grave los movimientos especulativos de capital. Sugerimos, asimismo, que los recursos obtenidos de este gravamen deberían ser aplicados, a través de los organismos multilaterales, a un programa mundial de lucha contra la pobreza y la exclusión social de todas las regiones del mundo.

Buenos Aires, octubre de 2001.

2

Solicitada por el señor senador Tell

Buenos Aires, 23 de octubre de 2001.

Señor presidente:

Elevó al señor presidente los fundamentos que motivan mi voto en disidencia con el dictamen aprobatorio del proyecto de ley en revisión sobre programa de propiedad participada de los ex agentes de YPF obrante en el expediente S.-91/01.

A manera de observación preliminar considero, señor presidente, que, bajo la forma de una ley aclaratoria, el citado proyecto dirime un conflicto coyuntural en un sector determinado desde el momento en que existen tantas causas en trámite. Por tanto, al interferir en una situación litigiosa, desnaturaliza la misión legislativa de este Honorable Congreso ingresando en competencias específicas del Poder Judicial.

En efecto, no se trata aquí de resolverlas mediante la sanción de una ley del Congreso que, en todo caso, debe proveer un instrumento de carácter general. Y la cuestión de los programas de propiedad participada previstos por la ley 23.696 y materializados para una diversidad de actividades privatizadas sin duda asumen ese carácter general que reclaman las normas creadas o a crearse por el Congreso.

Este reparo esencial puede ser superado, señor presidente, mediante una revisión integral del proyecto con la cual sí estoy a priori de acuerdo en tanto cumpla con ciertas condiciones.

Por lo pronto, la supresión de su exclusiva aplicación a un determinado programa (artículo 1º) y su proyección, en cambio, para todo tipo de programa de propiedad participada emergente de la ley 23.696 cuyo sujeto adquirente fuere un trabajador dependiente del ente sometido a privatización.

A partir de ese alcance —y con mayor razón hoy en virtud de la delicada situación que atraviesan las finanzas fiscales— todo reconocimiento a favor de los postergados debería provenir de una remodelación futura de los ingresos que aporte cada programa antes de transformarse en más deuda pública (artículo 5º).

A su turno, y habida cuenta de las fluctuaciones a que se ve naturalmente sujeto el valor venal de las acciones distribuidas por cada programa, para la indemnización que se reconozca (asunto tratado

en el art. 2º) debería predeterminarse una fecha para dejar fijado el valor de mercado de la acción de que se trate en un determinado momento.

Por otra parte, considero indispensable como condición de cobro para cualquier indemnización al estilo de la propuesta en el proyecto en revisión, que el beneficiario desista lisa y llanamente de las acciones que en tal sentido hubiere promovido en el ámbito administrativo y/o judicial persiguiendo el reconocimiento de los derechos contenidos en el marco de la norma que se apruebe. Esta cuestión no ha sido contemplada en el proyecto.

Tampoco me parece eficaz, señor presidente, el procedimiento previsto en el proyecto (artículo 4º) a mérito del cual se pone en cabeza del Ministerio de Economía la obligación de notificar a los ex agentes de que se trate las liquidaciones indemnizatorias que les correspondan, cuando hubieran estado trabajando en la empresa al 1º de enero de 1991. En tal caso, y a fin de agilizar el procedimiento y tomarlo verdaderamente idóneo para la concreción de los derechos de los beneficiarios, sería más apropiado que los trabajadores afectados presentaran su solicitud ante el Ministerio de Economía, otorgándole al Estado un plazo para efectuar el reconocimiento de tales créditos.

Finalmente, y en el marco de una genuina preocupación por los intereses de todos los trabajadores de las empresas privatizadas, resultaría conveniente agregar un dispositivo que textualmente prevea: "En todos los programas de propiedad participada instalados en las empresas privatizadas, el bono de participación en las ganancias previsto en el artículo 29 de la ley 23.696 será de un 10 % de las mismas y se deberá abonar retroactivamente por todo el tiempo que dure la explotación".

En este último sentido, señor presidente, se cumplirá de manera equitativa un triple objetivo: satisfacer la situación de los ex agentes postergados, mejorar el ingreso de quienes accedieron en su momento a los programas de propiedad participada y, al propio tiempo, favorecer la imputación de parte de los ingresos adicionales de los segundos a la cancelación de las indemnizaciones de los primeros.

Por las razones que anteceden, solicito al señor presidente se tenga por fundada mi disidencia para la que pido el apoyo de mis pares.

Alberto M. Tell.

3

Solicitada por el señor senador Arnold

Programa de propiedad participada

YPF se privatizó el 1º de enero de 1991. En el decreto de privatización el Poder Ejecutivo nacional determinó, tal como lo preveía la ley 23.696, los tres requisitos que hacían realidad el programa de propiedad participada. El primero: era la declaración de empresa sujeta a privatización. El segundo: voluntad de implementar por el Ejecutivo y el tercero, la

cantidad de acciones que se le destinaban al programa. Esos tres requisitos se cumplieron en 1991. El Ministerio de Economía a cargo del actual ministro Cavallo y el Ministerio de Trabajo de Caro Figueroa tardaron tres años en implementar el programa y establecieron como fecha de corte a la nómina de trabajadores de la empresa al 7 de julio de 1993. En el interín se desvincularon de la empresa casi 35.000 trabajadores, por varios métodos que fueron desde despidos directos a retiros voluntarios. Sin embargo en todos los casos estos trabajadores no pudieron acceder al programa de propiedad participada. Algunos reclamaron judicialmente en distintos ámbitos. Lo cierto es que el retardo en la acción del actual ministro sumió a 35.000 trabajadores, muchos de ellos del norte de mi provincia, en el desamparo al no reconocerles el derecho que por ley tenían. Este hecho es uno más de la política de exclusión que este modelo lleva adelante con los trabajadores. Se pretende hacer creer que el crecimiento del país se podía hacer espaldas de los trabajadores. Hoy, diez años después, volvimos con el mismo criterio a desarrollar políticas exclusivas para con la gente, que son los que dinamizan cualquier economía a través del consumo.

Debemos estar con la gente. Para muchos ex trabajadores petroleros hoy significa un reconocimiento a esa exclusión. Para terminar hay que precisar que hubo casos en que personal de YPF que ingresó a la empresa después de la privatización y accedió al programa, aun sin antigüedad, mientras hubo quienes habiendo trabajado para la ya privatizada y habiéndose negado la distribución de ganancias de la empresa, se fueron con las manos vacías.

Eduardo A. Arnold.

4

Solicitada por el señor senador San Millán

Señor presidente:

Mediante este proyecto de ley que viene en revisión se pretende el acceso al beneficio del régimen del programa de propiedad participada para los ex agentes de YPF que, por causas ajenas a su voluntad —fundamentalmente de orden temporal— quedaron excluidos de dicho régimen.

Como bien advierte el proyecto, hoy no sería posible la entrega material de las acciones que hubieran correspondido a los ex agentes excluidos, razón por la cual se sustituye dicha entrega por el pago de un monto indemnizatorio por parte del Estado nacional, el que puede ser abonado mediante Bonos de Consolidación (ley 23.982).

El artículo 1º del proyecto de ley en revisión modifica el inciso c) del artículo 8º de la ley 24.145 (de federalización de hidrocarburos y privatización de YPF). Recordemos que el mencionado artículo 8º establece las características de las acciones que componen el capital social de YPF S.A. y que el inciso c) se refiere al programa de propiedad participada.

En síntesis, la media sanción agrega al mentado artículo 8º inciso c) un párrafo mediante el cual incorpora como beneficiario del programa a todo el personal que se desempeñaba en la empresa al 1º de enero de 1991 y que había comenzado su relación laboral con anterioridad a dicha fecha.

El artículo 2º de la media sanción establece que el Estado nacional deberá indemnizar a los ex agentes incorporados al inciso c) antes mencionado, así como la forma de cálculo de la indemnización que correspondería abonar a cada uno, la que guarda relación con los ítem y parámetros que se aplicaron a los trabajadores que pudieron acogerse al régimen de propiedad participada hace varios años.

El artículo 3º dispone la suspensión de todos los juicios iniciados por los ex agentes de YPF con fundamento en su exclusión de los programas de propiedad participada, por un término de 120 días hábiles.

Cabe aclarar que tanto en primera instancia como en la alzada (cámara de apelaciones), ya hubo innumerables casos en que se obtuvieron sentencias favorables reconociendo los derechos que por esta ley generalizamos a todos los que están en idéntica situación, evitando así juicios innecesarios. Con esta sanción será el Congreso el que repare este acto de injusticia y de desigualdad entre argentinos ex trabajadores de YPF.

El artículo 4º encomienda al Ministerio de Economía la notificación a todos los agentes comprendidos por este proyecto de la liquidación que a cada uno corresponde percibir, fijándole para ello un plazo de 60 días hábiles.

El artículo 5º autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión de Bonos de Consolidación ley 23.982, para atender los gastos que origine la cancelación de las indemnizaciones dispuestas y/o a reasignar partidas presupuestarias para el mismo fin.

El artículo 6º fija el comienzo de la vigencia de la ley.

El artículo 7º es de forma.

Fundamentos jurídicos temporales

Para comprender la motivación del proyecto resulta necesario analizar jurídica y cronológicamente una serie de normas:

El artículo 21 de la ley 23.696 (B.O. 23-8-89) estableció que el capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas declaradas sujetas a privatización, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un programa de propiedad participada según lo establecido en los artículos siguientes. En su Anexo I, la ley incorpora como privatizaciones o concesiones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

El decreto 1.105/89 (B.O. 24-10-89), reglamentario de la ley 23.696, en su artículo 23 estableció que: "El acto que disponga las modificaciones estructurales necesarias para adecuar el ente a privatizar a la forma de sociedad anónima, estará expresamente

sometido a la condición suspensiva de que la privatización a través de un programa de propiedad participada efectivamente se concrete”.

El acto de modificación estructural a que se refiere el artículo citado, en el caso de YPF, es el dictado del decreto 2.778/90 (B.O. 11-1-91) que la transforma en sociedad anónima y aprueba sus estatutos, en los cuales puede verificarse en el título III. Capital. Acciones (artículos 6º a 9º) que nada se dice en relación a los programas de propiedad participada.

Recién al sancionarse la ley 24.145 (B.O. 6-11-92), aparece, en el artículo 8º, inciso c) la mención de los programas de propiedad participada, transformando en accionistas clase C al personal de la empresa.

En síntesis, los programas de propiedad participada se implementaron con el personal de la empresa remanente, luego del despido de una enorme cantidad de agentes.

Son estos antecedentes los que llevan a que alguno pueda sospechar la existencia de una maniobra por parte del Ministerio de Economía de la Nación tendiente a, con carácter previo, reducir la cantidad de agentes para, luego, implementar el programa de propiedad participada.

5

Solicitada por la señora senadora Raijer

Señor presidente:

La historia del ser humano está atravesada de paradojas, y hoy iniciado el siglo XXI voy a actualizar una más.

Desde tiempos inmemoriales se ha considerado a la maternidad como el paradigma de la mujer; se ha hablado en todos los idiomas, en todas las culturas, en todos los países como el “acto supremo de la mujer”. No hay figura que conmueva más, al decir de tantos, que la “pancita de una mujer embarazada”.

Pero ahora la paradoja: cuando una mujer anuncia su embarazo, aparece como una complicación en el mundo laboral; y aquí se manifiesta la callada, simulada y ladina discriminación.

Es común —y a fuerza de serlo— ya parece natural, que no se emplee a mujeres en este estado; o que al momento del empleo se valoricen más las mujeres solteras que las que “pudieran” quedar embarazadas: es decir las casadas.

¿Por qué no se protege a las mujeres embarazadas en el mundo laboral? Tanto en el ámbito privado como en el público. ¿No es acaso en este momento de mayor necesidad, cuando los beneficios de una comunidad debieran estar alertas para proteger a estas mujeres? La experiencia demuestra lo contrario, parece ausente del pensamiento de las empresas y se convierten en una molestia...

Sabemos de la cantidad de mujeres que callan este estado, sintiendo culpa por un delito que no existe.

De mujeres que pierden su trabajo porque no pueden contra el poder laboral, o el poder de la necesidad aceptando trabajar sin beneficios, “en negro” para poder cumplir con la responsabilidad de sumar ingresos a su familia.

¿Quién nos entiende?... Veneramos a la madre, regalamos escarpines rosas o celestes, pero de cuidar el mundo personal de crecimiento profesional, laboral, de las mujeres, poco nos importa.

No es una inválida la futura mamá. Por el contrario, ejerce un derecho que le ha sido dado por la naturaleza y ella tiene derecho a ejercerlo, porque lo ha elegido. Sin embargo, “la dejamos fuera”, como si su estado fuera un impedimento... pero eso, sí, a la hora del ensalsamiento, aparece la maternidad como valor supremo.

Las paradojas, señor presidente, son aún hoy moneda corriente a la hora de discriminar... y como siempre, o casi siempre, somos las mujeres, las protagonistas centrales de esta historia ya antigua y repetida. Basta recorrer los avisos clasificados, que solicitan empleados y no dudará señor presidente de la presencia de esta hipocresía, que festeja el Día de la Madre como el más sagrado y por otro lado, condena a estas madres a la más brutal diferencia: la imposibilidad de su desarrollo personal, o profesional.

Todos reconocemos que en las últimas dos décadas las mujeres han ingresado de manera masiva y a ritmo acelerado al mercado de trabajo en América latina, sin embargo, la situación laboral de las mujeres sigue caracterizándose por la subvaloración del trabajo femenino y una fuerte segmentación ocupacional como así lo demuestran diversos estudios (de la CEPAL, del Banco Mundial, Unifem, INDEC, entre otros). La mayoría de los empleos a los que ellas acceden son informales o inestables dentro del sector formal, además de precarios en cuanto a inestabilidad y cobertura de la protección social.

Un ejemplo de la precariedad que sufre un sector de la población de nuestro país es el de las mujeres contratadas por la administración pública cuya continuidad laboral está basada en la sucesión de contratos; que nos hacen más que negar la situación de dependencia, transformándose este mecanismo incierto en un modo de vida de estas personas.

Estas situaciones reflejan una dualidad puramente economicista que pone en riesgo el ejercicio de sus derechos de trabajadora. Es necesario reconocer que los ajustes estructurales y la globalización económica afectan diferente a hombres y mujeres, siendo en muchos casos discriminatorios contra las mujeres. En todas las regiones del mundo fueron las mujeres trabajadoras, productoras, consumidoras, madres y cuidadoras quienes han absorbido los efectos de los esfuerzos del ajuste, asumiendo una carga desproporcionada de los costos de este ajuste, lo que exige cuestionar la misma naturaleza de los programas de ajuste.